

Cobertura de salario mínimo en las rentas vitalicias: primer año de implementación

Sandra Rodríguez, directora Cámara de Seguridad Social
Fasecolda



En los primeros 12 meses de implementación del mecanismo de cobertura al riesgo de incremento del salario mínimo en las rentas vitalicias, se aprobaron el 82% de las rentas inscritas por las compañías de seguros.

De acuerdo con la Constitución Política, en Colombia ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Este derecho se otorga a todos los trabajadores que, afiliados al sistema de pensiones, cumplieron con los requisitos de la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital ne-

cesario para adquirir una mesada pensional. En otras palabras, la Constitución garantiza que la mesada mínima que reciban los pensionados sea equivalente a un salario mínimo, para que les permita satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación.

La Ley 100 de 1993 establece que el incremento de las mesadas pensionales depende de su monto; esto es, el reajuste de las mesadas superiores al salario mínimo legal vigente debe estar sujeto al incremento en el índice de precios al consumidor (IPC), y para quienes reciben una pensión cuyo monto es igual al salario mínimo, el reajuste será de acuerdo con el incremento de este.

En la práctica, esta garantía de pensión mínima establecida para las dos modalidades de pensión en el país, régimen de prima media y ahorro individual con solidaridad, conduce a que se generen aumentos superiores al IPC en la mesada pensional.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, esta medida genera inequidades entre los crecimientos de las mesadas de los afiliados, dado que durante los últimos diez años el incremento del salario mínimo mensual en Colombia ha sido superior al crecimiento del IPC.

Garantizar este incremento del salario mínimo vía mesadas pensionales tiene fuertes implicaciones para la sostenibilidad del sistema. De un lado, requiere de mayor esfuerzo fiscal por el impacto en el presupuesto público respecto al régimen de prima media y, de otro, requiere de un mayor ahorro individual en el régimen privado.

Por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, los afiliados que van a pensionarse deberán acumular un mayor saldo en sus cuentas de ahorro para adquirir una pensión que por lo menos sea equivalente al salario mínimo. Esto podría afectar la cobertura del régimen de ahorro individual porque al volverlo más costoso, genera incentivos para el traslado de afiliados al esquema de prima media, lo que incrementa el impacto fiscal para el Gobierno y afecta la sostenibilidad de todo el sistema pensional.

Inclusive esta garantía constitucional establecida en 2005 puede tener efectos adversos en el beneficio de los afiliados. Esto es, para aquellos afiliados que optaron por cubrirse del riesgo de longevidad y eligieron pensionarse con una renta vitalicia, el incremento del valor de esta por encima del IPC podría generarles el incentivo a cambiar de modalidad a retiro programado, corriendo

➔ En el régimen de ahorro individual, los afiliados que van a pensionarse deberán acumular un mayor saldo en sus cuentas de ahorro para adquirir una pensión que por lo menos sea equivalente al salario mínimo.

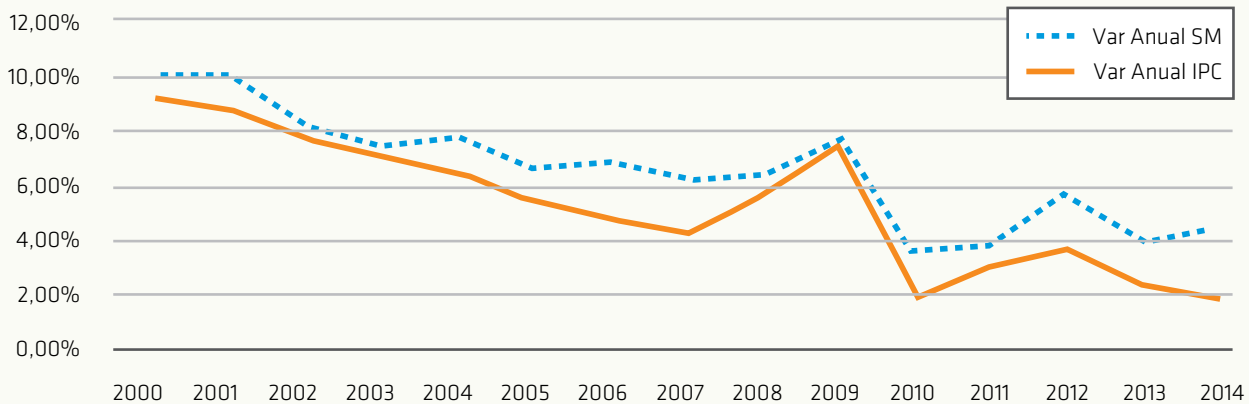
el riesgo de que en su condición de adultos mayores puedan estar desprotegidos después de algún tiempo.

Dadas estas consideraciones, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), diseñó un mecanismo a fin de que las compañías de seguros logren cubrir el riesgo del incremento que pueden tener las pensiones de rentas vitalicias, cuando el aumento del salario mínimo es superior a la variación del IPC del respectivo año. El 2016, es el primer año de implementación de este mecanismo, conocido como «cobertura por deslizamiento».

A continuación se describe la cobertura. El MHCP, con base en el crecimiento real de la productividad observada en los últimos diez años, define un parámetro de deslizamiento anual, con el que las aseguradoras que decidan ser beneficiarias de este mecanismo deben proyectar el crecimiento de las mesadas de las rentas vitalicias que se emitan.

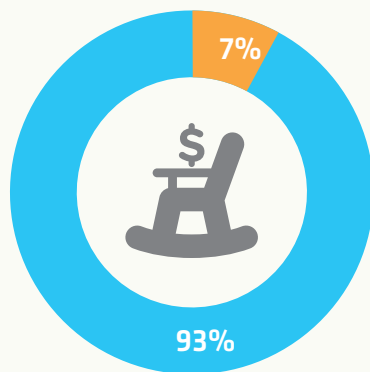
Si la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo y la variación del IPC es mayor al parámetro de deslizamiento calculado, el MHCP reconoce a las aseguradoras el faltante en reserva matemática de cada una de las rentas vitalicias inscritas.

Gráfico 1: Crecimiento anual salario mínimo vs crecimiento anual IPC 2000 -2014



Fuente: Fasecolda.

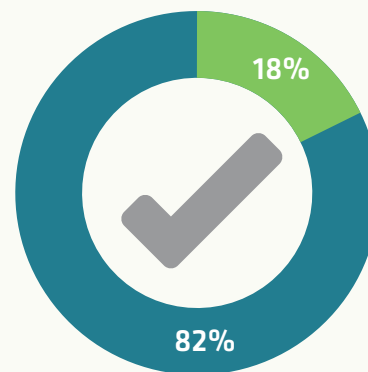
Gráfico 2: Rentas vitalicias emitidas 2015



● Inscritas ● No inscritas

Fuente: Fasecolda-MHCP

Gráfico 3: Rentas vitalicias con aprobación de cobertura 2016



● Rentas aprobadas ● Rentas rechazadas

Fuente: OBP-MHCP

Si la diferencia es menor, las aseguradoras pagarán al MHCP el monto equivalente al exceso en reserva matemática. Lo anterior, con el fin de que el mecanismo calce las reservas de las rentas vitalicias con el valor actuarial de las obligaciones futuras.

La implementación de esta cobertura inició los primeros 20 días hábiles de 2016, a partir de la inscripción de las rentas vitalicias emitidas en 2015, por parte de las compañías de seguros, como lo

establece el Decreto 036 de 2015. De acuerdo con la información del MHCP y las estadísticas del gremio, se inscribieron a esta cobertura el 93% de las rentas vitalicias emitidas en 2015 (3.723 rentas), a pesar de que en este primer año las compañías tienen una cobertura negativa y entrarán pagando al MHCP.

Según el procedimiento establecido en el decreto, a partir de esta inscripción de las rentas, el MHCP

➔ La no existencia de un mercado profundo de rentas vitalicias tiene graves implicaciones para el país, la más significativa se centra en la imposibilidad, para un gran porcentaje de pensionados, de trasladar los riesgos de extralongevidad y financieros a una aseguradora de vida.

efectúa una revisión y validación de los documentos y emite un acto administrativo con las observaciones que deberán ser subsanadas por las compañías de seguros, durante los quince días hábiles siguientes a esta comunicación. Al respecto, el 29 de febrero se expedieron las resoluciones por parte del MHCP, las cuales, en términos generales, mostraron que:


- el 32% de las rentas inscritas fueron aprobadas;
- el 60% presentaba documentación incompleta;
- el 8% fueron rechazadas.

Sobre estas observaciones, las compañías tuvieron quince días más, hasta el 22 de marzo, para completar los documentos faltantes y resolver los comentarios recibidos. Durante este tiempo, las compañías de seguros realizaron un gran trabajo que se ve re-

flejado en los resultados emitidos por el MHCP, el 14 de abril, luego de expedir las resoluciones definitivas frente a la cobertura de las rentas vitalicias: **se aprobaron el 82% de las rentas inscritas por las compañías de seguros al mecanismo de cobertura de deslizamiento, equivalentes a 3.072 rentas**

Este alto porcentaje de inscripción de rentas respecto a las emitidas, sumado al alto porcentaje de aprobación por parte del Gobierno, es una clara señal de respuesta de la industria aseguradora a la necesidad de que estos riesgos que surgen por medidas no previstas en materia legal, normativa y judicial puedan ser estimados y cubiertos, de tal manera que el mercado de rentas vitalicias pueda llegar al dinamismo que presentan hoy en día países como Chile y Perú, que no enfrentan este tipo de riesgos.

El Gobierno nacional, con este mecanismo, cubre uno de los riesgos que afectan la dinámica del mercado de las rentas vitalicias en Colombia. Recordemos que la no existencia de un mercado profundo de rentas vitalicias tiene graves implicaciones para el país, la más significativa se centra en la imposibilidad, para un gran porcentaje de pensionados, de trasladar los riesgos de extralongevidad y financieros a una aseguradora de vida. Esta situación, para la masa de trabajadores aportantes que se pensionan con uno o dos salarios mínimos, puede llegar a comprometer el financiamiento de la pensión durante toda su vida.

Si bien el impacto de esta medida podrá evaluarse con mayor certeza a partir del próximo año, la adopción de este mecanismo aumenta la confianza del sector asegurador sobre las medidas regulatorias que el Gobierno debería continuar implementando en materia pensional. 

Bibliografía:

- Informe de ponencia para primer debate al proyecto de Ley 11 de 2014, Senado.
- Acto Legislativo 01 de 2005.
- Decreto 036 de 2015.
- Resolución 3272 de 2015.